

proyectara lo contrario", acotó-, no se celebraría ninguna acuerdo de stand by, ni se refinanciaría la deuda externa en forma global.

Sin embargo, todos los esfuerzos de Pugliese, apoyados por el secretario de Hacienda, conducen a la solución de los problemas del sector externo.

El movimiento de viajeros se enriquecía con el inminente arribo del secretario ejecutivo del CONADE, Bernardo Grinspun, que había entretenido a las autoridades del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, a la espera del Plan de Desarrollo, y la partida de su colega Roque Carranza en compañía del presidente del Banco Central.

Dinero se necesitaba y no únicamente a nivel nacional, sino también dentro de los límites domésticos; el problema de los salarios en la órbita de las dependencias económicas. El subsecretario de Hacienda, Juan Carlos Delconte, suspendió por 30 días a los integrantes de La Asociación del Personal de Economía y Hacienda, firmantes de una violenta, justiciera solicitada, publicada tres días antes en el vespertino "La Razón".

Hace más de un año, -comunicaban- pidieron al secretario de Hacienda, Carlos García Tudero, un nuevo escalafón, recurrieron luego al Ministerio de Economía, a diputados y senadores de distintos partidos, y al hermano del presidente de la AFA: ningún resultado. Salvo la medida disciplinaria dictada por Delconte.

El personal celebró una asamblea en la playa de automotores del Palacio de Hacienda; allí se formó una comisión que debía entrevistar a las autoridades. Los empleados y obreros de maestranza y servicios se acumularon en los pasillos del 5° piso, en apoyo de la comisión y los funcionarios quedaron bloqueados, salvo el ministro Pugliese, que dejó el edificio sin recibir hostilidades.

El titular de Defensa, Leopoldo Suárez, sin saber qué estaba pasando, y los tres secretarios militares; fueron a tratar el aumento de sueldos de la FF.AA. El vaso desbordó. Los manifestantes se encolerizaron más aún y convinieron en renovar sus protestas al día siguiente.

No fue posible; unos 50 agentes de policía impidieron cualquier reunión o desplazamiento. García Tudero se dispuso entonces a lograr un acuerdo mediante el levantamiento de la suspensión y el proyecto de un plan aceptable para el personal olvidado.

PROBLEMAS ECONÓMICOS EN LA CGT

Una misma necesidad de dinero corroía a la Confederación General del Trabajo; en Azopardo 802 volvió a comentarse la pavorosa escasez de fondos que maniató a la central obrera. "Faltan recursos, inclusive, para organizar el acto público del 1° de mayo", sostuvo José Alonso.

El tema fundamental continuó siendo la retención de 100 pesos por trabajador del 1° de mayo, con destino a la CGT.

El gobierno no anunció si renovará el permiso para practicar esa retención, y el asesor letrado de la CGT, Fernando Torres, conferenció con Julio César Saguier, director general de Asociaciones Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resultado: cero.

Saguier contestó que la decisión no dependía de él y propuso que el secretario de la CGT, José Alonso, conversara con el ministro Fernando Solá; Alonso pareció inclinarse por ese criterio, pero en una reunión del Secretariado se desechó la idea: la audiencia podía ser utilizada por el gobierno con fines propagandísticos y no existe certeza alguna de que el vapuleado Solá accediera a la solicitud de la CGT. Los directivos de la CGT concluyeron que sólo podían recurrir al fuero contencioso-administrativo, para que una orden judicial obligue al Ministerio a expedirse

por sí o por no.

También las Fuerzas Armadas aguardan una definición a su planteo de mejores sueldos; el gobierno prometió una solución definitiva, sobre la base de un incremento general del 40%. Esa cifra no conformó: las Fuerzas Armadas señalan que con ese 40%, habría suboficiales y oficiales de menor jerarquía que no llegarían a ganar el pregonado salario mínimo, vital y móvil.

Las dos iniciativas con las que los justicialistas esperan abrir el fuego en el Congreso son: una ley de amnistía que haga factible el retorno al país de los desterrados políticos y otra que respalde la aplicación de los 13 puntos del Plan de Lucha de la CGT: 1) actualización de salarios; 2) Ministerio de Trabajo al servicio de la justicia laboral; 3) derogación de leyes represivas; 4) autarquía de las Cajas de Previsión; 5) control de precios; 6) reactivación de la industria y actividades rurales con sentido de empresas nacionales; 7) derogación de proscripciones políticas; 8) adecuación del presupuesto a favor de los docentes; 9) creación de nuevas fuentes de trabajo; 10) leyes en favor de la mujer; 11) reincorporación de obreros despedidos; 12) liberación de presos políticos y sociales; 13) política internacional independiente.

Entre ambas iniciativas ambula otra que propone la aplicación del salario mínimo, vital y móvil para los integrantes de las Fuerzas Armadas, y una cuarta en favor de la nacionalización de los depósitos bancarios y de creación de un ente de comercio exterior, similar al IAPI.

El peronismo, avanzaba en la unidad interna. Había un solo bloque de diputados, lo cual vaticinaba mayores dificultades para el gobierno.

Perón dice que no renuncia a volver a la Argentina, pero entiende que ese retorno no debería concretarse inmediatamente. Cree que tienen que llegar al poder por el camino de las urnas y que entonces su regreso sería automático y sugiere que es preciso apartarse de las soluciones de fuerza.

MARINI PROPONE UNA SALIDA

Mientras el peronismo trata de ajustar la unidad en el ámbito parlamentario y partidario sin descartar el proceso electoral de renovación de gobernadores de 1 %7, en el sector oficialista también hay cabezas pensantes. Una de ellas es la del gobernador bonaerense Anselmo Marini. Comió con los coroneles Alcides López Aufranc y Edgar Collins -jefe del Regimiento 8 de Tanques, cargo que antes ocupaba el primero, ahora, subjefe de Operaciones del Estado Mayor- y reservó para la sobremesa una sorpresiva solución que permitirá el fracaso electoral del peronismo.

Los jefes militares escucharon y se miraron asombrados por lo que parecía una broma: Marini propugnaba añadir a la Capital Federal el cinturón industrial del Gran Buenos Aires, que el 14 de marzo consolidó la fuerte victoria peronista en esa provincia. Pasarán los años y un nuevo gobierno radical, esta vez el del Dr. Raúl Alfonsín propondrá algo similar.

El Ministerio de Trabajo entregó su respuesta a la CGT: Sola interpretaba "el reclamo" como una solicitud, ponía condiciones (fijar los puntos a debatir, dar los nombres de quienes participarían en la entrevista) y afirmaba que una vez aceptadas, trataría los problemas que "afligen" a la CGT.

La CGT sufrió un nuevo encrespamiento cuando se concretaron los nuevos salarios mínimos, vitales y móviles: \$ 16.500 para la familia-tipo y \$ 11.500 para los solteros, que regirán desde el 1° de mayo. "Se ha consumado un nuevo despojo a la clase trabajadora", afirmaron los dirigentes de la CGT, para quienes el salario de la familia-tipo debe ser de 23.630 pesos, de acuerdo a cálculos de la canasta familiar. Impugnó también el procedimiento seguido por el Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que votó el proyecto del sector gubernamental, sin esperar el dictamen de la comisión encargada de informar sobre la variación estadística del costo de vida.

En realidad, el gobierno, apremiado por el incremento del costo de vida que ya produce la devaluación del peso, recurrió a una artimaña comiteril: señaló los nuevos toques y aseguró seis meses de calma. La CGT se mostró dispuesta a perturbar esa calma; apelará a todos los medios, comunicó, para promover una interpelación parlamentaria al ministro de Trabajo y lograr